
ITALIA: LA DEMOCRACIA BLOQUEADA

Giancarlo Pasquini



Vistas desde fuera, las vicisitudes de la política italiana presentan más de un aspecto paradójico, si no incomprensible. A primera vista, podría parecer que Italia está hoy gobernada por los socialistas, como sucede en Francia, España, Grecia y Portugal.

Desde hace casi seis años, en efecto, el presidente de la República es el viejo socialista Sandro Pertini, el hombre político más popular y más querido en Italia. Según una encuesta del semanario *L'Espresso*, el 59 % de los italianos querría seguir teniéndolo como presidente durante otros siete años, no obstante su edad avanzada (86 años). Desde hace

poco más de diez meses, el jefe del gobierno es Bettino Craxi, secretario del Partido Socialista Italiano (PSI). Con el 11,5 % de los votos, obtenidos en las últimas elecciones políticas de junio de 1983, el PSI ocupa, pues, los máximos cargos del Estado. Pero sería un error pensar que el poder está en manos de los socialistas o que los socialistas tienen un

papel predominante de guía o de dirección en el interior de la coalición de gobierno.

En Italia, como lo ha escrito Kissinger, el jefe del gobierno ha sido en estos últimos años un «punto de equilibrio momentáneo» entre los partidos, o bien una «instancia de mediación», casi nunca un centro de autoridad y de decisión como en las democracias más estables y en funcionamiento de Occidente. El sistema político italiano está bloqueado desde hace tiempo, sin recambio y sin alternancia. Ningún partido está en condiciones de ejercer una verdadera «hegemonía», ni posee la representatividad necesaria para formar gobiernos estables. La duración media de los gobiernos desde la postguerra en adelante ha sido de nueve meses y, cuatro veces seguidas, la legislatura ha sido interrumpida antes de completar su período por la comprobada imposibilidad de las sucesivas coaliciones para gobernar. El poder está «disperso», parcelado, fragmentado entre partidos, sindicatos, corporaciones, *lobbies*, poderes económicos e intereses particulares, cada uno de los cuales está en condiciones de ejercer un derecho de veto e impedir a los gobiernos que gobiernen y a las instituciones del Estado que funcionen.

Durante 38 años el sostén de este sistema ha sido la Democracia Cristiana, partido complejo y con muchos seguidores, que ha garantizado hasta la mitad de los años 60 la gobernabilidad del país. Pero con la declinación de la DC y la lenta pérdida de los consensos logrados desde 1976 en adelante, la «centralidad» del partido católico se ha empañado, sin que ningún otro partido, empero, lo haya sustituido como eje central del sistema político italiano.

Agotada la experiencia del centro-izquierda, o sea la alianza entre católicos, socialistas y partidos laicos, que ha dominado la escena política durante los años

**El sistema político italiano
está bloqueado desde hace
tiempo, sin recambio
y sin
alternativa.**

60, ningún proyecto político nuevo ha logrado surgir e imponerse. Mientras la sociedad sufría rápidas y profundas transformaciones, incluso bajo el impulso de los movimientos colectivos nacidos de las grandes luchas obreras y estudiantiles de 1968 y 1969, la clase política se mantenía firme e impermeable a lo nuevo y se mostraba incapaz de elaborar un proyecto de cambio para adecuar las estructuras del Estado y de la política a las variadas exigencias de una sociedad industrial avanzada y en vías de modernización.

La única respuesta de un cierto respiro estratégico llegó en los años 70, del Partido Comunista, con el proyecto del «compromiso histórico» que, de algún modo, reanudaba la estrategia del líder democristiano Aldo Moro, quien pensaba que, para dar por «cumplida» la democracia en Italia, era necesario iniciar una «tercera fase» (después de la centrista y del centro-izquierda) para extender el «área democrática» al Partido Comunista que, durante 30 años, había estado aislado y relegado —incluso por sus responsabilidades y las demoras en su proceso revisionista— a un papel de estéril oposición. Esta convergencia entre DC y PCI se concretó entre 1976 y 1979 en los gobiernos de «solidaridad nacional», una especie de «gran coalición» con la participación o el apoyo de los seis partidos del llamado «arco constitucional», comprendido el PCI. Por razones que examinaremos más adelante, esta tentativa de dar vida en Italia a una «democracia asociativa» también falló, y la gran alianza, hostigada entre otras cosas por el ataque terrorista de las Brigadas Rojas y por la violencia dispersa de los movimientos autónomos de ultraizquierda, naufragó sin producir modificaciones sustanciales en la sociedad, en la economía, en las instituciones del Estado. El secuestro (y después el asesinato) de Aldo Moro por parte de las BR el mismo día —16 de marzo de 1978— de la investidura del

gobierno Andreotti, apoyado por el PCI, marcó emblemáticamente el final de una alianza nacida bajo la bandera de la «emergencia», regida por la vieja praxis del «transformismo», y que muchos consideraban una alianza «contra natura»¹.

La legislatura que se abre con las elecciones anticipadas de 1979, después de que se retiraran los comunistas de la «mayoría programática» que sostenía al gobierno Andreotti, es la más cadavérica de todas. El electorado, que en 1976 había dado un signo claro de cambio, al llevar al PCI con el 34 % de los votos a debilitar la supremacía de la DC (35 %), parece arrepentido y desilusionado y reconfirma, con pequeñas modificaciones, las relaciones de fuerza previas a 1976 (DC 38 % [+ 3 %], PCI 30 [— 4 %], PSI 10 [+ 0,4 %]). Frente a esa sustancial estaticidad y al desgaste de todas las fórmulas políticas, no hay otro camino que reasumir el viejo centro-izquierda, revisado y corregido con la cláusula de la «pareja dignidad» impuesta por los socialistas como condición para participar en el gobierno. Convertido en fiel de la balanza, el «nuevo» PSI de Craxi comienza a practicar una política de movimiento para remover las aguas estancadas de la política italiana y para romper el bipolarismo paralizante DC-PCI. Con la cláusula de la «pareja dignidad», los socialistas logran arrancar a una DC en crisis dos compromisos: que el jefe del gobierno no necesariamente debe ser un democristiano, y que el gobierno debe estar formado por mitad de ministros democristianos y por la otra mitad de representantes de los otros partidos de la coalición. A falta de una alternancia real entre una verdadera mayoría y una verdadera oposición se recurre a una fórmula sustitutiva, y el PSI confía de este modo en escapar a la «subalternancia» que había caracterizado (y desgastado) la función de los socialistas en los gobiernos de centro-izquierda de los años 60.

**Agotada la experiencia
de centro-izquierda ningún
proyecto político
nuevo ha logrado surgir
e imponerse.**

Pero estos recursos, más que mejorar la gobernabilidad, acentúan la precariedad y la inconsistencia del ejecutivo. En cuatro años se suceden seis gobiernos el primer gobierno, presidido por Francesco Cossiga, de la DC, dura poco más de siete meses (agosto de 1979-mayo de 1980); el segundo gobierno Cossiga, seis meses (abril-septiembre de 1980); el siguiente gobierno, presidido por Arnaldo Forlani (DC), llega a mantenerse alrededor de ocho meses (noviembre de 1980-junio de 1981); el primer gobierno dirigido por un no democristiano en la historia de la República, el del republicano Giovanni Spadolini, dura más de un año (junio de 1981-julio de 1982), pero el segundo mandato de Spadolini no va más allá de cuatro meses (agosto-noviembre de 1982); cierra la serie un gobierno Fanfani (DC) aún más efímero que, asumido en diciembre de 1982, agota su mandato en abril de 1983, cuando el PSI abre la crisis que llevará a nuevas elecciones anticipadas.

No muy diferentes entre sí en cuanto al espacio político (que varía del centro-derecha al centro-izquierda) y a los grupos sociales a los que se dirigen, los partidos de las coaliciones de gobierno, aun disponiendo en el Parlamento de amplias mayorías (55-60 % de los escaños), no logran dar vida a gobiernos estables ni a mayorías homogéneas. Por razones de rivalidad electoral, de ambición, de sutiles disputas políticas y personales, los *partners* de las coaliciones están continuamente en pugna entre sí, siempre listos para las «emboscadas» (el fenómeno de los «francotiradores» es una especialidad totalmente italiana), y a «hacerse humo», divididos a veces en cosas esenciales, en las opciones de fondo de la política y de la economía; más a menudo en cosas marginales o de puro reparto del poder.

El resultado es la prevalencia de los vetos cruzados, la debilidad y la inestabilidad de los gobiernos, la parálisis de las decisiones, el inmovilismo, que han produ-

cido, como reflejo, el creciente extrañamiento de la opinión pública, el «desencanto» con respecto a la política, acompañada de fenómenos degenerativos alarmantes como la propagación de los escándalos financiero-administrativos, la explosión sin precedentes de la criminalidad organizada como la mafia y la camorra, y el surgimiento, en el vacío creado por la debilidad del Estado y de sus aparatos, de «poderes paralelos» como la logia masónica P-2.

La sociedad sumergida

En panorama semejante, que los periódicos definen como de «ruina», y que según muchos observadores preludia el fin de la Primera República, se pueden registrar dos fenómenos positivos: uno en el nivel de la sociedad civil, el otro en la esfera política.

Los años 70 han sido los más oscuros y dramáticos de la reciente historia italiana. Muchas de las contradicciones acumuladas en el curso de las décadas precedentes (el rápido y desordenado crecimiento económico, el paso de una economía agrícola con *enclaves* industriales a una economía industrial con residuos agrícolas, las transformaciones sociales y culturales resultantes de estos procesos), han estallado en estos años sacando a la luz la fragilidad del desarrollo económico, las debilidades del Estado, las insuficiencias patológicas del sistema político e institucional. La economía sufre los efectos combinados de la crisis internacional, de los factores distorsionadores propios del desarrollo italiano (la limitación de la base productiva, las marcadas desigualdades sociales y de la renta, la diferencia entre Norte y Sur), y del recrudecimiento de las reivindicaciones sindicales que hacen elevar los costos económicos de las empresas y los déficits públicos, lo que ha llevado a que la infla-

ción italiana alcance niveles muy superiores a la media europea.

Son los años de los grandes entusiasmos ideológicos. Mientras en el resto de Europa se afirma la cultura de la austeridad y se busca reformar las estructuras del Estado asistencial, en Italia perdura el mito de las «expectativas crecientes» sin productividad creciente, se afirma una cultura utópica e igualitaria que contamina no sólo los movimientos juveniles, sino también los sindicatos y los partidos de izquierda, y que la vocación «providencialista» de la Democracia Cristiana alimenta y favorece. Esta cultura se manifiesta en la contestación permanente, en el estallido de una conflictividad sindical y corporativa que no tiene igual en Europa, en el absentismo laboral favorecido por los excesos que garantiza el Estatuto de los Trabajadores y a veces en el rechazo del trabajo y de la organización del tra-

Convertido en fiel de la balanza, el PSI de Craxi comienza a practicar una política para romper el bipolarismo paralizante DC-PCI.

bajo. Los sindicatos proclaman que el salario es una «variable independiente» separada de la productividad, y que favorece el crecimiento de la demanda más allá de los recursos reales. Se lanzan reformas demagógicas y populistas, como la reforma de la sanidad y de la previsión, sin una preventiva acumulación de recursos. La vieja escuela, desde la enseñanza media superior a la universidad, es demolida en sus fundamentos, sin sustituirla con métodos y estructuras más modernas. A la conflictividad obrera y estudiantil se agrega, pues, en estos años, la rebelión de las masas pequeño-burguesas estatales y paraestatales ya sindicalizadas, y se crea un círculo vicioso sin fin ².

El déficit del Estado se vuelve incontrolable, la espiral precios-salarios, que se alimenta a través del mecanismo de indexación generalizado (escala móvil), reduce la competitividad de la industria italiana. El absentismo, la fuga de los capitales, la rigidez de la mano de obra

defendida a ultranza por los sindicatos, la recuperación indiscriminada de empresas fuera de mercado para evitar los despidos y las necesarias reestructuraciones,

debilitan el sistema productivo, lo que determina un estancamiento prolongado del desarrollo. Nacen así las «dos sociedades»: la de los empleados y protegidos, y la de los parados, sin garantías y sin perspectivas de futuro, mientras otros sectores (comerciantes, profesionales, especuladores) se enriquecen gracias a la inflación, el reparto de los recursos estatales y la evasión fiscal.

De la mezcla de estos elementos (delirio ideológico, estancamiento del desarrollo, exageradas y ofensivas injusticias sociales) se forma el germen explosivo que dará vida al terrorismo de las Brigadas Rojas y al más disperso de los movimientos autónomos de ultraizquierda, que proporciona a las primeras el caldo de cultivo y la base de reclutamiento para su estrategia de ataque al «corazón del Estado». De 1975 a 1980 Italia vive en una situación de «guerra civil subrepticia y simulada», con un «partido armado» que apunta a desquiciar el sistema y a derribar la democracia. Con una estrategia combinada que une la acción armada, la intimidación y la violencia con una calibrada acción política tendente a dividir a las fuerzas políticas y a debilitar aún más las instituciones, los cerebros de las Brigadas Rojas aspiran a crear una situación pre-insurreccional, una resquebrajadora del país de modo tal de obligar al Estado o a ceder al chantaje armado o a una respuesta represiva «fuerte» que abriría las puertas a un sistema autoritario³.

Nada de esto sucede. Frente al peligro concreto de desintegración la sociedad italiana reacciona y comienza lentamente a remontar la pendiente. El terrorismo es, primero, aislado políticamente, y después derrotado militarmente, sin atacar

**La sociedad italiana
ha superado la prueba y la
democracia ha respondido al embate
del terrorismo sin sacrificar
sus principios.**

en esencia las reglas de la convivencia democrática. Salvo pequeños núcleos marginales, el repudio del terrorismo, de sus métodos sangui-

narios, que han provocado centenares de muertos, es total y sin apelación. Al comienzo de los años 80 el fenómeno terrorista puede considerarse agotado y vencido y, gracias a una ingeniosa aunque discutible ley sobre los «arrepentidos», ha sido posible comprobar la responsabilidad de muchos hechos de sangre, los complots, las conexiones, las relaciones entre las diferentes centrales del terrorismo interno e internacional que, ahora, los tribunales de diversas ciudades italianas están discutiendo y juzgando. En conjunto, se puede decir que la sociedad italiana ha superado la prueba y que la democracia ha respondido al embate del terrorismo sin sacrificar sus principios.

Pero también en otro nivel, el económico y social, se ha iniciado una lenta y progresiva recuperación. Mientras el país parecía hundirse bajo el peso de la inestabilidad política y del no-gobierno, de la violencia política y común, de los escándalos y del terrorismo, la sociedad italiana segregaba de su seno los anticuerpos que le permitían reaccionar y hacer frente a las propias enfermedades. Según el CENSIS (un instituto de investigaciones sociológicas que cada año publica un *Informe sobre la situación social del país*), Italia ha tenido en los años 70 un segundo milagro económico: han surgido 300.000 nuevas unidades productivas, de pequeñas dimensiones pero tecnológicamente avanzadas; regiones enteras del país han cambiado de rostro (de Venecia a toda la faja costera del Adriático), y representan el impulso de un nuevo desarrollo. En gran parte se trata de una «economía sumergida» que escapa a las cargas tributarias, al control sindical y a menudo inclusive al fisco, a las normas previsionales y asistenciales, utilizando el «trabajo negro» y que, según las es-

timaciones del CENSIS, produce el 20 % de la riqueza nacional que no figura en las estadísticas oficiales.

De este modo, la economía italiana ha logrado mantenerse a flote sin hundirse, y preservando un alto nivel de consumo. Pero las apariencias no pueden engañar y, aunque alguno ha hablado de un «nuevo renacimiento», exaltando las cualidades ocultas del pueblo italiano, que sabe adaptarse y reaccionar ante las circunstancias adversas desarrollando sus innatas dotes artísticas e inventivas, certificadas por el éxito obtenido en el exterior por el *made in Italy*, no hay duda de que el país se ha empobrecido en su conjunto y se ha debilitado la economía. Aunque sin subestimar la importancia de lo «sumergido», más significativo se muestra el cambio presente en las relaciones industriales y en los comportamientos de las partes sociales. La mayoría del movi-

miento sindical, con la UIL a la cabeza (el sindicato socialista), la CISL (el sindicato católico) y una parte de la CGIL (de mayoría comunista pero con un fuerte

componente socialista), ha abandonado la estrategia de la conflictividad permanente, de la defensa a ultranza de discutibles conquistas, como la «escala móvil» (que ha sido, entre otras cosas, factor de achatamiento de los salarios y de la profesionalidad), y ha tomado el camino de reivindicaciones más realistas. El sindicato, que ha sufrido una profunda pérdida de credibilidad en estos años, ha debido, en esencia, echar cuentas con las compatibilidades generales del sistema, expurgando de su seno las tentaciones ideológicas y pansindicalistas, y accediendo a una más moderna y correcta visión de las relaciones industriales.

El nuevo curso socialista

El segundo elemento novedoso se registra en la esfera política. Frente al

impasse bipolar entre una DC gastada y declinante aunque siempre mayoritaria, y un PCI incierto y oscilante que ha abandonado precipitadamente la estrategia del «compromiso histórico» para abrazar, sin demasiada convicción, la hipótesis de la «alternativa democrática» a la DC, se presenta un tercer interlocutor hasta ahora reducido a una posición subalterna con respecto a la DC o al PCI: el Partido Socialista que, bajo la guía de Bettino Craxi, cambia de piel (los críticos, malignamente, dicen que sufre una «mutación genética») y adquiere un nuevo protagonismo. Marginado del abrazo entre DC y PCI durante el gobierno de «solidaridad nacional», el PSI, entre 1979 (Congreso de Turín) y 1981 (Congreso de Palermo), decide cerrar las cuentas con la herencia maximalista que lo condicionó durante casi toda su historia, y renovarse a sí mismo, su cultura política, su imagen. Reconectándose con el filón reformista

La mayoría del movimiento sindical ha abandonado la estrategia de la conflictividad permanente.

del socialismo italiano, el PSI advierte la necesidad de obrar desvinculado y autónomo, siendo ya portador de un proyecto de reformas y de modernización de la sociedad italiana que requiere más energías, más fuerza para el partido, e impone enfrentamientos tanto con la DC como con los comunistas.

En los años anteriores a la secretaría de Craxi, el PSI había estado prisionero de una autodefinición que lo llevaba a considerarse una fuerza de complemento de una estrategia que tenía como protagonista al Partido Comunista, es decir, su más directo rival de izquierda, y había terminado por aceptar el papel de «partido de servicio». Estando en el gobierno junto con la DC, los socialistas trabajaban por «equilibrios más avanzados», o sea por la legitimación y la inserción de los comunistas en el área de gobierno. Y, en efecto, mientras el PCI daba grandes saltos hacia adelante, el PSI retrocedía hasta tocar, en 1976, su mínimo histórico. Además, el PSI había aceptado,

sin oponer resistencia, la colonización ideológica marxista-leninista, renunciando de hecho a una propia, original y autónoma visión política. «Todo esto proporcionaba al PSI un singular estatuto político-ideológico: no era ni un partido reformista ni un partido revolucionario. Era sólo un partido confuso que irradiaba a su alrededor confusión»⁴. Fue en este punto, bajo la amenaza de una decadencia que a muchos les parecía imparable, cuando el PSI reaccionó con energía y, a través de un amplio debate, se redefinió a sí mismo y reencontró su vocación originaria, pragmática y reformista, ajena a las ideologías totalizadoras. La gran intuición de Craxi y de la corriente «autonomista» que asumió la conducción del partido a finales de los 70 fue la de comprender que, para sobrevivir, el PSI debía reivindicar con fuerza su autonomía y debía darse una nueva cultura política a la altura de una sociedad industrial moderna.

Dos son los objetivos que el PSI persigue con determinación, aunque con éxito alterno: desbloquear el sistema político a través de una «gran reforma» de las instituciones (como veremos más adelante); remodelar la representación política y el sistema de los consensos, tanto a través de un *reequilibrio a la izquierda* (erosionando el área electoral del PCI), como a través de una *expansión al centro*, sustrayéndole consensos a la DC. En el análisis socialista, la DC y el PCI, aunque muy diferentes en el plano ideológico, tienen muchas cosas en común. Son dos partidos-iglesia, con un vasto arraigo social basado, empero, en formas de representación obsoletas, con una cultura política premoderna, que viven de los réditos de las fracturas sociales del pasado pero son incapaces para acoger las grandes modificaciones producidas en la sociedad italiana. Un encuentro suyo, a través del «compromiso histórico» (según los socialistas), no habría desbloqueado

Para sobrevivir el PSI debía reivindicar con fuerza su autonomía y darse una nueva cultura política a la altura de una sociedad industrial moderna.

el sistema político, pero lo habría congelado por un largo período, cerrando toda posibilidad de dialéctica democrática y de innovación y relegando al PSI a un papel cada vez más marginal y superfluo. Por esto era necesario hacer naufragar aquel acuerdo, dar mayor fuerza política y electoral al Partido Socialista, y prepararse para una áspera confrontación con los dos «gigantes» de la política italiana, al fin del cual habría salido vencedor el partido que hubiese demostrado saber arriesgar más y saber interpretar y canalizar las exigencias de renovación presentes en la sociedad italiana⁵.

Para dar cuerpo a su estrategia el PSI ha buscado recortarse un espacio social propio, individualizando en los «sectores emergentes» y en las nuevas figuras profesionales, producidas por la revolución tecnológica, los sujetos que puedan expresar una «demanda de socialismo» y que puedan actuar para una transformación en este sentido. Según los dirigentes socialistas, el paso a a sociedad post-industrial conlleva no sólo la declinación cuantitativa de la clase obrera sino también su fragmentación y diferenciación, de tal modo de no hacerla ya «clase general» en condiciones de asumir en sí misma la tarea de la transformación. En su puesto hay una proliferación de figuras socio-profesionales: algunas avanzadas, que es necesario premiar porque son factores de innovación; otras, en cambio, abandonadas y dejadas detrás del proceso productivo, en rápida transformación, que hace falta proteger. A estos sectores el Partido Socialista debe dirigirse con una estrategia diferenciada de los «méritos y de las necesidades»: que, por una parte, recompense y valore la profesionalidad contra la igualdad retributiva creada por la rigidez del sindicato y, por la otra, dé garantías y proteja a los portadores de las nuevas necesidades: los jóvenes, los ancianos, las mujeres, aquellos que han sido expulsados y marginados de la

innovación tecnológica. A estos grupos individuales va dirigido el mensaje socialista y a ellos apunta la cúpula del PSI para remodelar la representación política.

En el curso de estos años el PSI persigue con despreocupación este doble objetivo: redimensionar la DC a nivel nacional, entrando en estrecha competencia con ella, y acosar al PCI a nivel ideológico (polemizando sobre los retrasos y las contradicciones de su proceso revisionista y de sus lazos residuales con la ideología marxista y con la URSS), y, a nivel de poder local, reivindicando la libertad de los socialistas para escoger de vez en cuando las alianzas más aptas para gobernar las administraciones regionales y municipales, sin ninguna preferencia preconcebida a favor de las «juntas rojas». En ambos casos el esfuerzo tendería a conseguir una *centralidad socialista*, a demostrar al electorado la indispensabilidad del PSI para la construcción de gobiernos estables y reformadores.

Pero esta operación, lograda en Francia con Mitterrand y en España con González, se revela en Italia, empero, más difícil y compleja. No obstante la vitalidad, el dinamismo, las «provocaciones» políticas e intelectuales que lanza a ritmo apremiante en la vida política italiana, el PSI no logra progresar electoralmente y adquirir consensos proporcionales a su peso político. En las elecciones de junio de 1983 —que los socialistas provocaron confiando en un fuerte avance electoral— su incremento es modesto, sólo del 1,5 %, muy por debajo de las expectativas.

Muchos elementos confluyen para explicar este fracaso parcial. Aludiremos sólo a algunos. Único entre los partidos socialistas europeos, el PSI se encuentra combatiendo en dos frentes y debe rendir cuentas a su izquierda con el partido comunista más fuerte de Europa Occidental,

El PSI ha buscado un espacio social propio individualizando en los «sectores emergentes» y en las nuevas figuras profesionales los sujetos que puedan expresar una «demanda de socialismo».

sólidamente inserto en la clase obrera, y a su derecha con la Democracia Cristiana, igualmente inserta, y de manera estable, entre los sectores medios. Por

lo anticuadas, las formas de inserción político-organizativa de los dos mayores partidos no han podido ser afectadas, y el mensaje socialista no ha logrado hasta ahora abrir una brecha en las estructuras consolidadas de los dos partidos. Esto ha ocurrido también porque, después de un primer momento de dispersión, tanto el PCI como la DC han percibido la peligrosidad del desafío socialista y se han preparado para enfrentarlo.

Para el grupo dirigente comunista, y en especial para su secretario Enrico Berlinguer, el «craxismo» se ha vuelto el peligro número uno, la nueva encarnación del enemigo de clase, al que es necesario exorcizar y vencer. La separación se remonta a los tiempos de la «unidad nacional», cuando el PCI demostraba que prefería el diálogo con la DC antes que con los socialistas, pero se ha acentuado después de finalizada esa experiencia cuando, frente al imprevisto vuelco comunista del «compromiso histórico» a la «alternativa democrática», los socialistas declaran que no existen las condiciones políticas y electorales para dar vida en Italia a una alternativa de izquierda. En el documento del Comité Central del PCI (noviembre de 1981), que sanciona tal vuelco, se afirma que la alternativa se debe construir «con las mejores energías de la democracia italiana, con hombres capaces y honestos de los diferentes partidos y también fuera de ellos». En ese documento el PSI no es siquiera mencionado y, entre los dos partidos, parece dominar más la incompreensión que la conflictividad. En la mayoría del grupo dirigente del PCI (a excepción, quizá, de la corriente que encabeza Giorgio Napolitano) hay un exceso de desconfianza prejudicial hacia el PSI, considerado un partido oportunista, listo para mon-

tarse en cualquier ocasión para exhibirse y conquistar posiciones de poder. Hay un juicio moralista sobre el «craxismo», acusado de los peores vicios y pintado como un fenómeno de bases frágiles, de corto aliento y destinado al fracaso. En lugar de confrontarse con la cultura reformista del PSI, los dirigentes comunistas dan de ella un juicio expeditivo y la liquidan como un trámite más, para justificar un presunto vuelco a la derecha del partido que habría abandonado sus tradicionales posiciones de izquierda para converger en el centro, junto a las fuerzas moderadas.

Pero en el fondo del conflicto, además de las profundas diferencias culturales y políticas, hay un temor real de los comunistas por la carga de competitividad del PSI, por su reencontrada autonomía y unidad, por su rechazo a continuar siendo un partido «gregario». Esto ha llevado al partido de Berlinguer a cerrar filas, a hacer un llamamiento a las razones de su «diversidad» y a desarrollar una peligrosa carga de hostilidad e intolerancia hacia el PSI, la cual, a menudo, desemboca en el sectarismo.

También la DC ha reaccionado a su modo frente al desafío socialista, y la elección de Ciriaco De Mita en la secretaría debía servir para «desmitificar» a Craxi. El partido católico, en efecto, después de haber perdido a su estrategia con la muerte de Aldo Moro, el hombre de las grandes prudencias pero también de las grandes visiones proyectuales, parecía replegado en sí mismo, sin más capacidad de iniciativa y de propuesta. Con la elección de De Mita —un hombre de la «tercera generación» DC— y el recambio del personal dirigente la Democracia Cristiana persigue dos objetivos: la propia renovación interna y la recuperación de una posición de supremacía, seriamente comprometida por los acontecimientos de los últimos años. En efecto, la vieja estructura del partido (el partido-

Estado, el partido como instrumento de la ocupación del poder, el partido de la mediación y del compromiso) había entrado irremediabilmente en crisis. El nuevo grupo dirigente se da cuenta de que si quiere detener la tendencia a la declinación debe romper la cristalización de las viejas clientelas, de las corrientes y de los notables, y abrir el partido hacia el exterior. Pero lo debe hacer con un proyecto político creíble y que compita con el perseguido por los socialistas.

Por eso, la operación De Mita se contrapone a la que están realizando los socialistas y se dirige a contrarrestar la tentativa de Craxi de abrir una brecha entre los sectores medios urbanos y de disputar a la DC la representación de intereses decisivos de la formación empresarial. Esta maniobra se despliega en dos niveles. En el plano político, De Mita se introduce con una teoría suya del sistema político

El PSI persigue redimensionar la DC a nivel nacional, entrando en estrecha competencia con ella, y acosar ideológicamente al PCI.

italiano, sosteniendo que éste gira alrededor de dos polos representados por la DC y por el PCI, que están en alternancia el uno con respecto al otro (por lo tanto destinados a no gobernar juntos), y que un «tercer polo laico-socialista, como el auspiciado por el PSI, no existe «ni cultural, ni numérica, ni políticamente». Por lo tanto, estas fuerzas deberán abandonar toda veleidad y resignarse a funcionar como partidos-filtro, escogiendo aliarse a uno u otro de los dos grandes partidos de masas. En el plano económico-social la DC —partido del asistencialismo desenfrenado, protector de los sectores parasitarios nutridos con los recursos públicos— declara agotado el Estado asistencial y agita con De Mita la bandera del «rigor» económico, de la productividad, de la modernización, defendiendo las tesis monetarias y neoliberales en boga. De este modo, la DC busca presentarse como un moderno partido conservador capaz de guiar, a través de un renovado acuerdo con los sectores modernos del capitalismo italiano, una

nueva fase de expansión productiva, con el explícito fin de *preservar su centralidad* y de conservar el consenso de un bloque social amplio y compuesto como el que ha sostenido al partido en su larga historia de gestión del poder. Es evidente, en todo esto, la tentativa de frenar las ambiciones del PSI y poner una valla a las incursiones socialistas en su área de representación.

Pero el sueño de De Mita se enfrenta con la lógica férrea de las cosas. En las elecciones de junio de 1983, la DC pierde más del 5 % de los votos, alcanzando con el 32,8 % de los votos su mínimo histórico. Después de la derrota electoral, el secretario de la DC es objeto de fuertes críticas y se somete su línea política a acusación. El viejo partido de las clientelas y de las corrientes, apenas deshojado por el viento de la renovación, resurge prepotente e impone un seco alto a los propósitos de refundación por parte del secretario. Aunque reelegido en la conducción del partido en el reciente Congreso de Roma (febrero de 1984), De Mita, condicionado de cerca por los jefes de las corrientes de su partido, ha debido guardar en el cajón muchas de sus buenas intenciones para dejar el puesto a una gestión descolorida y renunciante que sólo de vez en cuando reencuentra chispazos de vitalidad.

Pero los fracasos electorales del PSI no derivan sólo del comportamiento ajeno, de las maniobras defensivas y ofensivas de los otros partidos, de los «complots» verdaderos o presuntos urdidos para detener la marcha triunfal del PSI. Deriva también de los propios errores, de los comportamientos «esquizofrénicos» del partido en el centro y en la periferia, de las contradicciones entre lo que dice y lo que hace. Así, por ejemplo, la dirección socialista, en la tentativa de derribar a la DC de su posición de centralidad, ha tratado de sustituir a ésta como

interlocutor de los grupos y de las clientelas sobre las que se funda gran parte del poder democristiano, y ha sido obligada a bajar al terreno del «loteo»⁶ y del reparto de los recursos estatales. Los muchos casos de complicidad de representantes socialistas, sobre todo en la periferia, en fenómenos de «loteo», corrupción y ocupación del poder, además de dañar la imagen del partido han alejado precisamente a aquellos grupos (las nuevas figuras profesionales, los técnicos, los trabajadores del sector de servicios más avanzados) a los que se quería atraer. En la práctica, el PSI ha dado la impresión de ser poco sensible a la «cuestión moral» y mucho más aferrado al poder, del cual retiene, en el centro y en la periferia, una tajada desproporcionada con un peso electoral.

Esto ha ocurrido porque ha faltado una verdadera renovación de la forma-partido, de su funcionamiento y de su aparato. El PSI se ha renovado en la cúpula, dándose una inédita estructura de liderazgo carismático centrada en la incontrovertible preeminencia del secretario (que ha provocado, en el exterior del partido, fuertes críticas y valoraciones contradictorias), pero no se ha renovado en sus estructuras de base. El PSI sigue siendo un partido viejo que debe realizar una política nueva, pero ésta está obstaculizada por comportamientos incoherentes con respecto al proyecto general. La nueva política reformista se sostiene en un cuerpo frágil y el partido no ha sabido crear los antídotos para prevenir las infecciones internas, y ha dado espacio a personajes y grupos «trepadores» que han aprovechado sus posiciones de poder para ilícitos fines personales o de grupo. «El resultado —escribe Salvatore Sechi en *Mondoperaio*— es que el PSI sigue

Unico entre los partidos socialistas europeos, el PSI se encuentra combatiendo en dos frentes y debe rendir cuentas a su izquierda y a su derecha.

siendo un partido «segundo» en estructura electoral y totalidad de aparato, con una contradicción lacerante entre la cultura de gobierno de la élite central y

las prácticas subalternas o agresivamente divisorias de sus articulaciones subnacionales»⁷.

Aunque el mismo Craxi ha reconocido que la organización del partido es el eslabón débil del nuevo curso socialista, la reforma del partido continúa siendo aplazada. El reciente congreso de Verona (mayo de 1984), que debía centrarse precisamente en este tema, ha sido absorbido por las cuestiones políticas contingentes y ha dado a luz, solamente, la creación de una pletórica Asamblea nacional, abierta a los «de fuera» del área socialista, en el puesto del viejo Comité central, que aparece más bien como una operación cosmética para comprometer en el *appeal* simbólico del partido a intelectuales y personajes de relieve. Pero no obstante estos y otros defectos, escribe un politólogo no sospechoso de simpatías socialistas: «la estrategia del PSI y las modalidades con las cuales se explica son completamente nuevas con respecto al pasado. Jamás tan unido en su interior, jamás tan agresivo y visible, el PSI de Craxi representa una novedad en la escena política italiana»⁸.

El gobierno Craxi

Después de las elecciones políticas del 26 de junio de 1983 y el «gran derrumbe» de la DC (DC -5 % [32,8]; PCI -0,3 [29,7 %]; PSI +1,5 % [11,5]; PRI +2 [5 %]), las fuerzas del pentapartido deben dirigirse a Craxi para formar un gobierno. La cesión de la presidencia del gobierno a un socialista no es una benévola concesión del mayor partido a su aliado más inquieto e incómodo, sino la comprobación de un cambio en las relaciones de fuerza, políticas antes inclusive que electorales. El PSI no ha llegado a trastornar los datos cuantitativos, pero ha impuesto su presencia política y, aprovechándose de su posición de «fiel de la balanza», se ha presentado como candidato a la guía

El PSI se ha renovado en la cúpula pero no en sus estructuras de base.

del gobierno para hacer posible la gobernabilidad del país. Más que por la propia fuerza, el PSI obtiene la presidencia del gobierno por la debilidad de los otros

partidos y, en primer lugar, de la DC, y por los defectos del sistema institucional que los socialistas han sido los primeros en denunciar. La DC acepta la pérdida de la presidencia del Consejo como un «estado de necesidad» y con muchas reservas mentales, y está decidida a hacer difícil la navegación del gobierno Craxi, el primer gobierno conducido por socialistas en la historia de Italia.

El programa con el que nace el gobierno Craxi es el ritual en este período en Europa y no presenta nada comprometededor. Dos son los puntos definitorios: 1) abrir una nueva fase constituyente para una revisión de la Constitución republicana. Pero esta tarea es confiada al Parlamento, con el nombramiento de una Comisión bicameral, en la que están representados todos los partidos que han suscrito el pacto constitucional de 1948; 2) saneamiento de la economía y lucha contra la inflación, a través de una contextual política de rentas y de contención del déficit público. Con este propósito se fijan algunos «techos»: la inflación deberá ser contenida dentro del «techo» del 10 % y esto requiere una intervención en el costo del trabajo (escala móvil), que es uno de los factores de amplificación de la espiral inflacionaria. El déficit del Estado deberá ser contenido dentro del techo de los 90 billones de liras, lo que implica fuertes cortes al gasto público y cierta revisión del sistema previsional y a los gastos sanitarios, que son factores estructurales de producción del déficit. El fin es poner de nuevo en marcha el desarrollo y enganchar la *recovery* que mientras tanto se perfila en los Estados Unidos.

Los primeros seis meses de navegación del gobierno Craxi son tranquilos y sin tumbos. La nave de la coalición avanza

en un mar relativamente calmo y el gobierno puede apuntar algunos resultados positivos. Sobre todo en política exterior: la gestión equilibrada, reconocida por todos, de la presencia de un contingente militar italiano en Líbano y su ordenada retirada sin siquiera una pérdida; la reconfirmación de la instalación de los misiles Cruise en Sicilia y de la alianza con los Estados Unidos (testimoniada por el viaje de Craxi a América), pero acompañada por el pedido de explotar todos los caminos para reabrir el diálogo con Moscú (visita de Craxi a Hungría y de Andreotti a la URSS); la firma de un nuevo concordato con el Vaticano; el empeño incansable por superar los contrastes en el interior de la CEE. Pero también en política interior el gobierno Craxi logra algunos éxitos: por primera vez en muchos años se aprueba la ley financiera en los términos previstos por la Constitución; se realizan cortes en los

gastos sanitarios y en los previsionales para mantener el déficit de balance entre los términos fijados; se envían al Parlamento numerosos proyectos de ley (entre

los cuales hay uno que reduce los períodos, escandalosamente largos, de la encarcelación preventiva) que, empero, quedan atascados en las comisiones parlamentarias, a causa de los largos plazos y de lo farragoso del proceso decisorio.

Pero, ya a fines de enero, la nave gubernativa encalla en los bajíos de la conflictividad interna de la coalición y afloran de nuevo los contrastes y las desconfianzas. El gobierno es sometido a acusación por haber intervenido en los nombramientos para la renovación del Consejo de administración de la RAI, el ente radio-televisivo del Estado. En realidad, se trata de una maniobra montada «en frío» para poner en dificultades a Craxi, que sólo se ha limitado a hacer respetar una regla no escrita, pero vigente y aceptada por todos los partidos, según la cual la RAI debe ser administrada por los

partidos del arco constitucional según las relaciones de fuerza parlamentarias, que Craxi ha resumido en una especie de número telefónico —643111—: es decir, seis consejeros para la DC, cuatro para el PCI, tres para el PSI y uno para el PRI (republicanos), PSDI (socialdemócratas) y PLI (liberales). La polémica es abierta por el diario *La Repubblica*, pero la recogen de inmediato, además del PCI, la DC y los republicanos, los cuales, después de haber participado en el «reparto» de la RAI, se muestran ahora escandalizados y acusan a Craxi de haber promovido un «loteo salvaje» de los entes públicos.

Pero éste es sólo el preludeo de lo que ocurrirá en los meses siguientes, cuando el gobierno, como aplicación de su maniobra económica, lanza el famoso decreto que «corta» tres puntos de escala móvil (una reducción del salario nominal

de 180.000 liras anuales por cada trabajador). Por el decreto se desencadena una batalla campal que tiene un alcance mucho mayor que los tres puntos que le

sirven de pretexto. Tratemos de resumir brevemente los hechos para analizar, después, su significado.

Sobre el tema de la escala móvil (un sistema automático de aumento de los salarios que se dispara cada tres meses) se ha debatido en Italia durante años. La gran mayoría de los economistas se encuentra de acuerdo en considerar este sistema una de las causas (no la única, naturalmente) del diferencial inflacionario italiano que, además, no protege enteramente el salario real y es un poderoso factor de comprensión de los salarios (siendo el único punto igual para todos, ha anulado con el tiempo las diferencias retributivas, lo que ha afectado a la profesionalidad). También los sindicatos, después de muchas vacilaciones, se han convencido de que es necesario modificar este mecanismo inadecuado a través de una

**La cesión de la presidencia
de gobierno a un socialista supone
la comprobación
de un cambio en las relaciones
de fuerza.**

«reforma del salario» que, empero, se ha quedado en las buenas intenciones. Entre las fuerzas políticas, los más tenaces defensores de una intervención sobre la escala móvil son la DC de De Mita y el PRI de Spadolini, los cuales dicen estar de acuerdo, en el curso de la campaña electoral, en que donde no sea posible lograr un pacto entre las «partes sociales» el gobierno debe reapropiarse del asunto y debe intervenir con autoridad. Los socialistas son más tibios y sostienen que el «rigor» debe estar acompañado por la «equidad».

El gobierno Craxi, a pocos meses de su instalación, hace saber a las «partes sociales» (sindicatos y empresarios, a quienes se solicita por costumbre la contratación del salario) que, para el logro de la maniobra económica, es esencial que se encuentren de acuerdo para reducir el costo del trabajo. Las negociaciones se prolongan durante meses, con la mediación también del ministro de Trabajo De Michelis, pero no conducen a nada. El mismo Craxi interviene para desbloquear el *impasse*. Se llega a una hipotética solución en la que están de acuerdo los empresarios, la CISL, la UIL y los miembros socialistas de la CGIL, en la práctica la mayoría del movimiento sindical, con excepción de los comunistas de la CGIL, que hacen uso del derecho de veto. El gobierno decide, el 14 de febrero de 1984, intervenir con un decreto que, además del recorte de la escala móvil, prevé el bloqueo de las tarifas públicas, medidas fiscales y de otro tipo, que son de estrecha competencia del gobierno. En este punto se desencadena la *hagarre*. El Partido Comunista y la parte comunista de la CGIL se movilizan contra el «recorte» en el costo del trabajo con huelgas, concentraciones, manifestaciones, ocupaciones de estaciones ferroviarias, no obstante la firme oposición del resto del movimiento sindical. La unidad sindical que, con altibajos, había resistido durante doce años,

Entre las muchas anomalías italianas está la de no existir una clara distinción entre mayoría y oposición.

se fragmenta, y la misma unidad interna de la CGIL se pone en peligro.

Berlinguer acusa a Craxi de llevar al país al desgarramiento social, a la disgregación económica, a una crisis institucional de proporciones imprevisibles. En su informe al Comité Central del PCI (20 de febrero) Berlinguer pronuncia una condena sin apelación contra el gobierno encabezado por el socialismo. Dice que la maniobra económica, además de ser injusta, es también ineficaz y aparece sólo «como una maniobra política entre cuyos fines está el de debilitar y marginar a la GGIL y al PCI». Afirma que el gobierno Craxi es peligroso para todos porque, interviniendo en una materia reservada a la libre contratación de las «partes sociales», ha violado la Constitución y ha cometido «un atentado contra una de las libertades irrenunciables del orden democrático de la República». Finalmente, el líder del PCI, dirigiéndose a los partidos de la mayoría, los invita a reflexionar, porque «si se dejan andar así las cosas no se debilita a un gobierno, se debilita al país», y «nosotros queremos evitar que se llegue a una crisis político-institucional de la República, que podría ser de proporciones imprevisibles». Berlinguer les ofrece la oportunidad de un «gobierno diferente», no mejor especificado, pero que sin embargo debería dejar de lado a los socialistas. Así pues, la alternativa democrática del PCI no se esgrime frente a la DC sino frente al Partido Socialista.

Después de esta dura respuesta de Berlinguer el conflicto se desplaza al Parlamento, primero al Senado y después a la Cámara. El objetivo del PCI es impedir la conversión del decreto en ley. Así como la Constitución italiana establece que si un decreto del gobierno no se transforma en ley en 60 días se pierde, el juego de los comunistas es simple. Sirviéndose de los reglamentos parlamenta-

rios, hechos a medida para garantizar los derechos de la oposición, el PCI realiza un intransigente obstruccionismo presentando miles de enmiendas y haciendo

intervenir a todos sus parlamentarios. De este modo, aunque el decreto haya sido aprobado por el Senado (23 de marzo), y aunque el gobierno haya obtenido dos votos de confianza, aquél se pierde en cuanto la Cámara no llega a pronunciarse y a votar dentro del término de los 60 días. El primer tiempo de la partida termina, pues, con una victoria de los comunistas.

En el curso de esta batalla frontal, en la que las relaciones entre socialistas y comunistas están al borde de la ruptura, la cohesión y la solidez de la mayoría manifiestan evidentes signos de resquebrajamiento. De Mita critica a Craxi por haber extremado el conflicto con los comunistas, y acusa al gobierno de «forzamientos» y de excesiva «desenvoltura». En una entrevista, el líder de la DC declara: «No ceo que un demócrata responsable pueda desear que caigamos en un conflicto sin salida. Hace falta fantasía por parte de todos. Aun permaneciendo firmes en los objetivos, las estructuras pueden cambiar»⁹. A las críticas de De Mita se adhieren de inmediato los republicanos de Spadolini, que atacan el «decisionismo» de Craxi, la irritación exhibida por el gobierno frente a la oposición y al mismo tiempo la modestia de los objetivos económicos que con el decreto se pueden alcanzar. En esencia, el llamamiento de Berlinguer no ha sido desatendido: una parte de la DC y los republicanos se muestran cada vez más intolerantes con respecto a Craxi, y trabajan para debilitar e ilegitimar al gobierno con conducción socialista, en el que los dos partidos están presentes como fuerzas. Como apunta el politólogo Giovanni Sartori, en un sistema multipolar con competición centrífuga, como el italiano, cualquier coalición se bloquea o se

**Los socialistas defienden
la concepción
de la «democracia gobernante»
en la que se restablezcan los límites
entre mayoría y oposición.**

disgrega en cuanto toca los nudos de la crisis.

Después de la pérdida del decreto, el gobierno lo vuelve a presentar con ligeras modificaciones para ir al encuentro de los insistentes requerimientos de la mayoría de evitar el conflicto frontal con la oposición. Pero esto no les basta a los comunistas, quienes vuelven a proponer el obstruccionismo. Pero esta vez el gobierno se sale con la suya y después de 115 días el decreto es definitivamente aprobado (9 de junio). La larga guerra por el decreto concluye así con la victoria de Craxi. Pero es una victoria a medias porque, en el ínterin, con el resurgimiento del caso de la logia masónica P-2, el clima en el interior de la mayoría se hace pesadísimo y la coalición está ya al borde de la crisis. Después de la publicación del informe previo de la Comisión parlamentaria especial de investigación sobre las actividades especulativas y ruinosas de la logia de Licio Gelli —que continúa desestabilizando e infectando la vida política italiana—, los partidos del gobierno intercambian acusaciones feroces y la lucha política decae al nivel de pelea «de todos contra todos», en la que la búsqueda de la verdad sobre este inquietante *affaire* está subordinada a maniobras políticas instrumentales para hacer caer al gobierno o a indescifrables mensajes de complicidad o de advertencia. En una palabra, en vista de las elecciones europeas del 17 de junio, la mayoría se disuelve; entre los partidos que la componen se desencadena una conflictividad exasperada con todas las ventajas para la oposición comunista, que espera recoger los frutos de tal situación.

Sin embargo, es posible rescatar de tanta confusión algunos significados que, al menos por lo que respecta a la «guerra del decreto», son bastante claros. Se ha tratado ante todo del conflicto entre dos concepciones diferentes de la democracia. Entre las muchas anomalías italianas

está la de no existir una clara distinción entre mayoría y oposición. Desde hace más de diez años, antes aún de que naciesen los gobiernos de «solidaridad nacional», el Partido Comunista ha comenzado a formar parte del *área decisoria*, dado que, aun no habiendo participado en ningún gobierno, ha compartido con los otros partidos el 1,85 % de la producción legislativa, imponiendo pactos, acuerdos, compromisos, a todas las mayorías. El axioma «sin el PCI no se gobierna» se ha vuelto un dato esencial de lo que los comunistas llaman la «constitución material», pero que resulta anómalo y paralizante con respecto a los modelos de democracia europeos y fuente no única de confusión y de bloqueo del sistema político italiano. En efecto, el «cambio político» en Italia consiste en el no-gobierno a cambio de la no-oposición, con la consecuencia de que el PCI no gobierna pero legisla y que otros gobiernan pero no pueden legislar sin el consenso del PCI.

A esta concepción de la democracia fundada sobre los «amplios pactos», sobre las transacciones, los convenios, las mediaciones a toda costa, los socialistas oponen la concepción de la «democracia gobernante» en la que se restablezcan los límites entre mayoría y oposición y cada uno pueda cumplir su función; en la que la mediación sea sustituida por la decisión y al gobierno se le den los instrumentos para gobernar y dirimir los conflictos. Lanzando el decreto sobre la escala móvil y asumiendo sus responsabilidades, Craxi ha intentado romper el sistema de una democracia parlamentaria. Pero esto no podría gustarle al PCI, que estaba privado de un rédito fortísimo, el que le ha permitido participar en las decisiones de gobierno e influir en su rumbo aún permaneciendo en la oposición. Y así el PCI ha desencadenado la oposición contra Craxi acusándolo de ser «decisionista», «autoritario», «peligroso»,

ya no socialista y ni siquiera socialdemocrático, sino «thatcheriano».

Por haber conducido una batalla con el emblema de un gobierno que finalmente gobierna y decide, superando los tiempos muertos de las mediaciones y de los compromisos, Craxi es acusado de haber atentado contra la Constitución, de querer llevar a Italia hacia un sistema autoritario y, además, de querer dejar de lado el Parlamento. Pero la campaña del PCI contra Craxi tiene objetivos diferentes: se dirige a defender *no* la democracia entendida en sentido europeo y occidental (democracia como alternancia, democracia como sistema regulado de los conflictos), sino la posición y el papel que el PCI ha conquistado en el interior de la «democracia asociativa», la cual nace de la comprobación de que en Italia no hay otro camino para realizar un gobierno eficiente sino el de encontrar una mayoría que abrace, con varios recursos y con varias concesiones, la parte más relevante de las fuerzas políticas e, *in primis*, los dos grandes partidos populares: la DC y el PCI. Craxi debe ser derrotado porque ha roto el encanto de la asociación y ha pretendido gobernar sin el PCI.

Los socialistas, en cambio, están convencidos de que es posible cambiar el sistema político y desbloquearlo a través de una reforma de la Constitución. Desde 1978 y 1979 han propuesto el tema de una «gran reforma» de las instituciones que, así como son, no pueden ya servir al país. Creadas en una fase precisa, después de la caída del fascismo y la segunda guerra mundial, en una sociedad que exigía representación política y tutela amplia de las minorías, las actuales instituciones no permiten la formación de

Los socialistas están convencidos de que es posible cambiar el sistema político y desbloquearlo a través de una reforma de la Constitución.

mayorías que decidan y de oposiciones que controlen, pero favorecen todo tipo de mezclas y, por último, no hacen posible un límpido proceso decisorio. El sistema

italiano, en efecto, es el único en el mundo que asume los defectos de un sistema electoral proporcional, que favorece la fragmentación de los partidos, de un sistema parlamentario de tipo asambleísta, que hace lenta y confusa la producción legislativa, y de un ejecutivo débil y con pocos poderes que termina por estar a merced de las mayorías parlamentarias y no puede garantizar ni la estabilidad ni la gobernabilidad. Por estas razones los socialistas sostienen que a esta situación de ingobernabilidad no es posible darle una respuesta sólo en términos de cambio de las relaciones de fuerzas políticas, sino que es indispensable pensar también en cambiar los mecanismos institucionales y en revisar las reglas del juego. Piensan ellos en una reforma en profundidad de la Constitución que toque, sobre todo, las relaciones ejecutivo-legislativo, con un reforzamiento de las prerrogativas del gobierno; y la relación partidos-electores, con una reforma de la ley electoral. Una vez realizadas estas reformas será posible —sostienen los socialistas— la alternancia de los partidos con la guía del gobierno, y el sistema político italiano, bloqueado desde hace 40 años, podrá funcionar con menos impedimentos y anomalías.

La «democracia gobernante», auspiciada por Craxi y por los socialistas, se ha enfrentado, empero, con la intransigente oposición de fuerzas poderosas. La reforma de la Constitución, aunque haya sido nombrada una comisión parlamentaria especial, no avanza y será limitada al máximo en algunos retoques marginales que no cambian la sustancia del problema. La mayoría de las fuerzas políticas, comenzando por los comunistas y los democristianos, están convencidos de la irreductibilidad del «caso italiano» a los modelos políticos de la Europa occidental. Italia es un caso aparte, donde las dificultades de gobierno pueden ser superadas sólo con el más amplio enten-

dimiento y colaboración entre las fuerzas políticas. Más que las diversidades, las diferencias, los momentos de ruptura, una acción de gobierno debe hacer resaltar los momentos de acuerdo, de consenso, de unanimidad. Incluso la última propuesta de Berlinguer de un «gobierno diverso» no es más que el replanteamiento del «compromiso histórico» o de una variante suya (en la práctica, una coalición DC-republicanos apoyada por los comunistas). Y se ha visto cómo, en los últimos meses, esta propuesta ha encontrado oídos atentos y disponibles en amplios sectores de la Democracia Cristiana, fastidiados por la iniciativa craxiana y temerosos de que los socialistas puedan recortarse un espacio en el centro, en los mismos feudos tradicionales de la DC. Ahora, la imprevista y trágica muerte de Enrico Berlinguer hace más problemática e incierta la posibilidad de que este proyecto puede realizarse, pero en Italia

**El sistema político italiano
es el único en el mundo
que asume los defectos
de un sistema
electoral proporcional.**

los nostálgicos del compromiso histórico son muchos, anidados en todos los rincones de la sociedad italiana. Por lo tanto, no es difícil conjeturar que —aunque no sea en un plazo inmediato, y salvo que se produzcan vuelcos improbables de estrategia por parte de la nueva dirección del PCI— el debilitamiento del gobierno Craxi, las maniobras que se han tramado en estos meses para despotenciar y vaciar el contenido innovador de la presidencia socialista, preludien un relanzamiento de la colaboración entre democristianos y comunistas, con el aval de los republicanos, también ellos atemorizados por la posibilidad de que los socialistas lleguen a arar en su propio campo ¹⁰.

Por otra parte, los resultados de las elecciones europeas del 17 de junio, con el «salto» dado finalmente por los comunistas, y la capacidad de la Democracia Cristiana que parece haber tenido su *trend* electoral negativo, han reconfirmado la bipolarización de la vida política italiana. Las fuerzas intermedias han sido penaliza-

das y el Partido Socialista ha sufrido una significativa derrota. Su desafío no ha sido recogido por los electores quienes, frente a lo nuevo y a lo imprevisto, han preferido confiarse en certezas más tranquilizadoras. Ahora, los partidos de la mayoría se preparan para una «verificación» que debería confirmar la actual coalición,

aunque con una recomposición del gobierno, pero sería un error fatal si el Partido Socialista y Craxi se dejasen enredar en una gestión inmovilista del poder, a la espera de que maduren otras soluciones y otras fórmulas políticas.

Traducción: Mario Merlino

¹ Sobre el compromiso histórico véase el número especial de la revista *Laboratorio politico*, núm. 2-3, marzo-junio 1982, dedicada enteramente a este asunto.

² Sobre estos aspectos véase: Alberto Ronchey, *Accadde in Italia*, Garzanti, Milano, 1977.

³ Para la relación entre el movimiento del 68 y el terrorismo, véase Nando Dalla Chiesa, «Del Sessantotto e del terrorismo: cultura politica tra continuità e rottura», en la revista *Il Mulino*, núm. 273, enero-febrero 1981.

⁴ Luciano Pellicani, «Il reformismo alla prova dei fatti», in *Mondoperaio*, núm. 4, aprile 1984.

⁵ Véase el número especial del *Mulino*, con el título «Un partito che si cerca», núm. 281, mayo-junio 1982 y en especial los ensayos de Gianfranco Pasquino, «Centralità non significa governabilità», y de Giuseppe Carbone, «Il difficile modello di un partito secondo».

⁶ Con este término («lottizzazione») se entiende en Italia la tendencia de los partidos de gobierno (y no) a dividirse y a ocupar los entes públicos y estatales, desde los mayores como los grandes *holdings* (como el IRI, el ENI, el ENEL) hasta los grandes bancos, los institutos previsionales y asistenciales, la RAI, hasta las sociedades municipalizadas y las unidades de servicios que administran determinados servicios públicos en el territorio.

⁷ Salvatore Sechi, «Un partito vecchio per una politica nuova», in *Mondoperaio*, núm. 1, 1984.

⁸ Gianfranco Pasquino, «La strategia del PSI tra vecchie e nuove forme di rappresentanza politica», in *Critica marxista*, núm. 1, 1983.

⁹ Del diario *La Repubblica*, del 5-6 abril de 1984.

¹⁰ Esto es lo que escribe el politólogo Giovanni Sartori a propósito del compromiso histórico: «El compromiso histórico propuesto por Berlinguer no es una gran coalición, no es un frente popular, no es siquiera una democracia asociativa. El compromiso histórico es una alianza o coalición entre un gran partido católico y un gran partido comunista y, por tanto, una fórmula de gobierno distinguida por dos características: ser una diarquía dominada por dos

socios sobrantes, los cuales constituyen, a todos los efectos, dos puntos de coagulación alternativos y contrarios de la distribución de las fuerzas políticas. Dos consecuencias están implícitas en esta caracterización. La primera es que los partidos menores (comprendido el PSI) se vuelven totalmente innecesarios, ampliamente irrelevantes y desprovistos de una fuerza de reclutamiento. Esto no quiere decir que no sean halagados con ofertas de gobierno y de subgobierno, pero todos saben que el papel de los partidos menores es un papel de comparsa, de cobertura, de legitimación a través de un refuerzo de la unanimidad. La esencia es que un gobierno católico-comunista aplastaría a los otros, los cuales, si se someten al juego, serán mantenidos con vida y recompensados; de otro modo, se verán apartados y en liquidación.

La segunda implicación concierne a la naturaleza de la diarquía y más precisamente de una coalición hegemónica por dos socios que se definen, ideológicamente, por exclusión recíproca. Una coalición de este tipo, de hecho, representa la menos compacta y la más conflictiva de las coaliciones imaginables. Lo que pone a una mayoría de gobierno en condiciones de gobernar es la afinidad ideológica. Por el contrario, cuanto mayor es la distancia ideológica, tanto mayor es la conflictividad interna y la parálisis decisoria. El compromiso histórico se propone como una coalición diárquica que es, al mismo tiempo, una diarquía polarizada. Polarizada, porque la DC y el PCI son partidos de verdad «heterogéneos» y con muy baja amalgabilidad. Se reaniman con opuestas visiones del mundo, a las cuales son altamente sensibles los respectivos militantes y también electores. Es impensable que el PCI se exponga a la acusación de dejarse domesticar. Si la DC resiste, será una parálisis aún mayor que la que ha vuelto inoperante al centro-izquierda; si cede, se deja fagocitar, la diarquía termina, y el sistema se transforma en una monocracia. En todo caso, una diarquía polarizada resulta una fórmula del todo disfuncional y, como tal, nacida para morir». La cita procede del volumen *Partiti e caso italiano*, Sugarco, Milano, 1982.